



**PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN LA IMPUTACIÓN FÁCTICA Y  
JURÍDICA**

**DOCENTE: Dr. RICARDO ARTURO ARIZA LOPEZ**

**MAESTRANDO:  
ELIN MARCELA NARVAEZ FIRIGUA**

**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  
DEPARTAMENTO DE POSTGRADOS  
MAESTRIA DERECHO PROCESAL PENAL  
Bogotá D. C., Noviembre de 2012**



*Agradecimientos:*

*A Dios, a mi familia,*

*a mi esposo y mis hijos por la cuota de sacrificio en este reto personal.*

*A mis docentes por sus enseñanzas.*



## **Resumen**

A través del presente trabajo se analiza el alcance del principio de congruencia, desde el punto de vista de la imputación fáctica y jurídica y las diferentes etapas del proceso penal a través de las cuales se materializa el principio.

## **Palabras clave**

Principio de Congruencia, imputación fáctica y jurídica, audiencia de formulación de imputación, acusación, juicio oral, Juez de Control de Garantías, Inferencia razonable.

## **PRINCIPLE OF CONGRUENCE IN ALLOCATING LEGAL AND FACTUAL**

## **Abstract (Summary)**

Through this work we analyze the scope of the principle of consistency, from the point of view of the legal and factual allegation and the different stages of the criminal process through which embodies the principle.

## **Key Words**

Principle of congruence, legal and factual imputation, imputation formulation hearing, indictment, trial, Judge Warranty Control, reasonable inference.



## INTRODUCCIÓN

En Colombia como en casi la mayoría de países latinoamericanos, se ha venido experimentando durante las últimas décadas el ascenso de la criminalidad y junto a él la impotencia no solo de la población civil sino de los entes encargados de ejercer justicia –Policía Nacional, Ejército y Rama Judicial-, pues este incremento igualmente genera represamiento de despachos y por consiguiente la impunidad, siendo este el pronóstico, el legislador determinó que para dar respuesta a esta avalancha de casos impunes debía responderse con un nuevo modelo de justicia pronta, eficiente, basada en la oralidad y que permitiera un perfecto balance entre justicia garantista y eficiencia en términos de tiempo de resolución de casos. Es así como surge la Ley 906 de 2004 que adoptó un modelo de Sistema acusatorio.

Con la expedición del Acto Legislativo No. 03 de 2002 que modificó los artículo 250 y 251 de la Carta Política se dio un viraje a las funciones otorgadas a la Fiscalía General de la Nación, pues se le atribuyó la labor de *“adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querrela o de oficio”*. Todo lo anterior, en desarrollo de la separación de funciones de investigación y juzgamiento, la cual constituye uno de los principios más importantes del Sistema Acusatorio.

Es a partir de la Ley 906 de 2004, que se dividió de manera clara los dos estadios básicos del proceso penal, la investigación y el juzgamiento, es precisamente el primero de ellos el que pretendo revisar en este documento,



más específicamente la congruencia que debe existir en la imputación fáctica y jurídica que se realiza en la audiencia de formulación de la imputación como momento procesal fundamental y basal a partir del cual se derivan una serie de consecuencias jurídicas para el proceso y para el indiciado.



## **LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN COMO GARANTÍA PROCESAL**

La audiencia de formulación de imputación, es la garantía consagrada en el artículo 14.3 a del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del art. 82b de la Convención Americana de Derechos Humanos, se refiere al derecho que tiene el detenido a ser informado de los cargos que se le atribuyen en su contra. Según la Observación General No. 13, párrafo 8 del Comité de Derechos Humanos, la información debe indicar tanto la ley como los supuestos de hechos en que se basa.

Por su parte, la Convención Europea de Derechos Humanos exige en su artículo 5.2 que toda persona detenida sea suficientemente informada sobre los hechos y las pruebas en que se basa la decisión de detenerla. En concreto debe permitírsele que se manifieste si admite o niega la presunta infracción.

Así entendida la garantía de la audiencia de formulación de imputación, tiene dos objetivos fundamentales: Por un lado, facilitar a toda persona arrestada o detenida obtener información que le permita impugnar la legalidad de la detención, y por otro, conocer que se está acusada por una infracción penal, que se está en espera de juicio oral y comenzar a preparar su defensa.

En este sentido, es a partir de este momento procesal que se edifica la acusación, que en términos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se refiere a la imputación y que actualmente en el derecho



colombiano tiene escenario en audiencia oral ante un juez de control de garantías.

En nuestro derecho interno, la noción de Audiencia de imputación generalmente tiene su origen en la acción u omisión de un autor que tiene una relación causal con un resultado que a su vez tiene implicaciones jurídicamente relevantes, es decir que se subsumen en una norma penal.

Conforme lo prevé el Art. 286 del C.P.P. la audiencia de formulación de imputación "...es el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado...". Pese a que la norma prevé que es un acto de comunicación, esta audiencia entraña más que una simple gesticulación de hechos y normas, pues como lo regula el art. 287, se hará una imputación por parte de la Fiscalía si de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida, se puede inferir que el imputado es probable autor o partícipe de la conducta que se investiga. La norma en cita, exige que se infiera razonablemente que el imputado pueda ser autor o partícipe de la conducta que se investiga, dicha inferencia razonable, causa probable para detener, motivos o indicios fundados, son conceptos tratados en el derecho angloamericano, según los cuales debe existir conexión entre todos los elementos del delito imputado y la conducta del indiciado.



## **JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS**

Como se anotó en el aparte anterior, una de las modificaciones más importantes que introdujo el Acto Legislativo 003 de 2002, al nuevo Sistema Procesal Penal, fue la creación del Juez de Control de Garantías, quien tiene por virtud del legislador unas competencias difusas, tales como realizar audiencias para un control previo, posterior y de trámite a las actuaciones desplegadas por la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación, entre ellas tenemos:

### **a. De control previo:**

- Para permitir ó no la búsqueda selectiva en base de datos.
- Autorización ó no sobre la petición de inspección; registro corporal y obtención de muestras que involucren al imputado.
- De la petición de orden de captura, entre otras.

### **b. De control posterior:**

- Control de captura en flagrancia.
- De registros y allanamientos.
- De interceptación de comunicaciones telefónicas y similares; de recuperación de información dejada al navegar por internet, entre otras.

### **c. Las Audiencias de trámite:**

- Aplicación del principio de oportunidad.





- Declaratoria de persona ausente.
- Decretar la medida de aseguramiento contra el imputado, revocatoria o sustitución de dicha medida, entre otras.

Así mismo, deberá autorizar cualquier medida adicional que implique afectación de derechos fundamentales y que no tenga una autorización expresa en la Constitución Nacional.

Así las cosas, el Juez de Control de garantías examinará si las medidas de intervención en el ejercicio de los derechos fundamentales, practicadas por la Fiscalía, se ciñen a la ley, establecerá si en verdad son ó no necesarias, adecuadas, proporcionales y razonables, en otras palabras, deberá determinar si la medida de intervención en el ejercicio del derecho fundamental **(I)** es adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo; **(II)** si es necesaria por ser la más benigna entre otras posibles para alcanzar el fin; y **(III)** si el objetivo perseguido con la intervención compensa los sacrificios que esta comporta para los titulares del derecho y la sociedad.

## CONGRUENCIA ENTRE LA IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

En nuestro sistema procesal penal, la congruencia es un principio que históricamente ha tenido transformaciones de algún modo abanderadas por la jurisprudencia y la doctrina sobre la base de diferentes criterios acerca de la imputación fáctica y jurídica y la congruencia entre estas.

Es así como con la expedición del Decreto 2700 de 1991, se determinó en el art. 442 que la acusación debía establecer “3. *La calificación jurídica provisional, con señalamiento del capítulo dentro del título correspondiente del Código Penal.*” Lo que denota un apego a las formas procesales, como quiera que se fija un parámetro para valorar la calificación como lo es que el tipo penal debe contenerse dentro de un título y capítulo respectivo.

Bajo el marco de esta normatividad, la Corte Suprema de Justicia realizó el siguiente pronunciamiento:

*La resolución de acusación es el pliego concreto y completo de cargos, precisados tanto fáctica como jurídicamente, que se hacen al procesado para que frente a ellos ejerza el derecho de defensa. Pero para que tal garantía tenga cabal operancia, el acusado debe tener certeza sobre las imputaciones hechas, motivo por el cual no se le puede responsabilizar en la sentencia por circunstancias agravantes no deducidas en el calificadorio.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 27 de julio de 1998, radicación 9857.

Igualmente, cabe resaltar que es a partir de la Acusación que se predica la congruencia con la sentencia, por lo que no se encuentra en la norma en cita, el término “imputación” en el sentido que hoy es acuñado, de hecho la norma no menciona la imputación.

La jurisprudencia constitucional sobre el principio de congruencia regulado en el artículo 220-2 del Decreto 2700 de 1991, señaló que:

*El legislador, al expedir los códigos, debe consagrar la manera de hacer efectivas las normas constitucionales referidas, especialmente, al debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a la administración de justicia (artículos 29 y 229 de la Const. Pol.).*

*Concretamente, en los asuntos penales, dentro de las garantías fundamentales para el procesado, en desarrollo y armonía con el debido proceso, se deben respetar los siguientes principios:*

*a) El enjuiciado debe conocer previamente a la sentencia, los motivos por los cuales es acusado por el Estado. Esta garantía es la consonancia que se predica entre la acusación y la sentencia.*

*b) A pesar de las modificaciones que se introduzcan a la acusación, éstas no pueden ser de tal naturaleza que rompan la consonancia entre la acusación y la sentencia.*

*c) Al enjuiciado no se le puede sorprender con hechos nuevos sobre los cuales no tenga oportunidad de defenderse.<sup>2</sup>*

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000, se establece en el art. 338 que en la indagatoria “se le interrogará sobre los hechos que originaron su vinculación y se le pondrá de presente la imputación jurídica provisional”, con lo que se pone de presente los primeros cimientos de la imputación en términos procesales.

Con los diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional, se establece que con relación a la imputación jurídica provisional, esta debe tener ese carácter dado la necesidad de respetar el debido proceso, toda vez que se protege la presunción de inocencia, la cual solo se desvirtúa con la sentencia condenatoria, de otro lado, el mismo fallo determina que ante su errónea calificación lo procedente es la declaratoria de Nulidad.<sup>3</sup>

Ahora bien, en cuanto a las variaciones en la calificación jurídica provisional, el máximo Tribunal Constitucional determinó que debe hacerse “por un juez independiente e imparcial, que este en capacidad de variar la imputación, sin pronunciarse sobre la responsabilidad del procesado”<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Corte Constitucional, sentencia C-541 de 01 de Octubre de 1998. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

<sup>3</sup> Corte Constitucional, sentencia C-620 del 13 de junio de 2001. M.P. JAIME ARAUJO RENTERÍA.

<sup>4</sup> Corte Constitucional, sentencia C-1288 del 5 de diciembre de 2001. M.P. ÁLVARO TAFUR GALVIS.

Posteriormente, con motivo de la diversas discusiones que sobre el principio de congruencia se surtieron al interior de la Comisión Redactora Constitucional creada por el Acto Legislativo N° 003 de 2002, se resaltan posturas como la del comisionado Ramírez Bastidas quien subrayó que, «desde el punto de vista de las garantías, parece adecuado establecer un momento en el cual se le diga al individuo por qué se le está procesando. Señaló que no se debe tratar de una información a fondo pero sí que le permita empezar a tomar las medidas para defenderse y no esperar a que se le descubran los cargos cuando se le convoque a juicio. Indicó ser partidario de que se dé ese tipo de formalización de la investigación sin que se vuelva al antiguo proceso»<sup>5</sup>. Con lo que se dan los cimientos de la imputación como audiencia, momento determinante para activar el derecho de defensa por parte de quien es indiciado y luego imputado.

Ahora, en cuanto al principio de congruencia en vigencia de la ley 906 de 2004, se ha determinado por la jurisprudencia que:

1). El principio de congruencia hace parte de lo que se denomina estructura conceptual del proceso penal, que se da con la definición progresiva y vinculante de su objeto. En tales términos la congruencia es el acto por antonomasia definidor del mismo en sus ámbitos personal, material y jurídico, y aparece contenido en la acusación<sup>6</sup>. La falta de identidad sobre alguno de ellos, genera lesiones a las garantías del debido proceso y de la defensa<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Acta N° 25 del 30 de junio de 2003, YESID RAMÍREZ BASTIDAS, p. 24.

<sup>6</sup> Sentencia de segunda instancia del 29 de septiembre de 2005, radicación 23914.

<sup>7</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 1° de junio de 2006, radicación 24764.

2). El principio de congruencia se vincula al derecho de defensa en la medida en que permite el conocimiento de los hechos que se atribuyen al acusado y sus correspondientes consecuencias jurídicas; gracias a ese conocimiento, libre y voluntariamente puede el imputado optar entre aceptar los cargos con miras a lograr una sustancial rebaja de la pena o continuar el juicio para discutir los hechos o su responsabilidad, allegando pruebas en su favor o contravirtiendo las que se aducen en su contra<sup>8</sup>.

Podría determinarse que con la nueva sistemática procesal en la cual se debate probatoriamente en el marco del juicio oral, la exigencia sobre los aspectos facticos y jurídicos de la imputación serían menores, pues se limita la norma a determinar que se deben narrar los hechos jurídicamente relevantes, sin embargo esto no resulta ser cierto como quiera que en los eventos en los cuales se termina de manera anticipada el proceso, como cuando se presenta allanamiento a cargos o preacuerdo, es precisamente donde la conducta debe tipificarse con la mayor precisión dado que se renuncia al derecho a no autoincriminarse y a tener un juicio oral y público (artículo 350 numeral 2 ley 906 de 2004)<sup>9</sup>. Pese a esta exigencia, se evidencia en la práctica judicial ligerezas por parte de los Fiscales al momento de realizar la adecuación típica de las conductas que se pretende imputar, desconociendo que debe analizarse la tipicidad y descripción de la conducta por acción u omisión, - art. 9 y 10 C.P.P.- y la posibilidad de que se presenten errores de tipo o de prohibición, es por ello que se propone el examen del principio de estricta legalidad en el proceso valorativo de

---

<sup>8</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 20 de octubre de 2005, radicación 24026.

<sup>9</sup> Ibídem.

atribución respecto de una concreta situación fáctica que debe derivarse de una norma de mandato o de prohibición y ajustarse a una descripción abstracta contenida en el denominado tipo penal.

Ahora bien, en cuanto al análisis del dolo debe considerarse que la doctrina y la jurisprudencia han asumido que tienen un aspecto objetivo y uno de orden subjetivo, con lo cual al momento de la imputación el Fiscal Delegado debe efectuar una verificación de los dos aspectos especialmente el objetivo, esto es, la existencia del hecho, dado que el segundo se refiere a la voluntad. En cuanto al objetivo, el sujeto pasivo y activo, si es calificado o no, la acción u omisión, el verbo rector del delito compuesto, el grado de participación.

Continuando con el desarrollo de la audiencia de imputación, se deben resolver temas relativos al tiempo en que se realizó la conducta –art. 26 C.P.P.-, el lugar donde ocurrió o territorialidad – art. 14 C.P.P.- para finalizar con la inferencia razonable, tema que se tratará más adelante.

Indudablemente en Colombia se optó por una imputación doble, esto es, fáctica y probatoria, la cual tiene su génesis en el momento mismo de la audiencia de formulación de imputación; es a partir de esta audiencia que se marcan los dos extremos de la balanza en contienda, Fiscalía y Defensa, éste último para quien tiene un carácter especial esta diligencia, habida cuenta que con este conocimiento de la investigación se activa su derecho de defensa y pasa de ser un indiciado a un imputado.

## **DERECHO DE DEFENSA ANTES DE LA AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN**

Sobre el derecho de defensa la Corte Constitucional ha delimitado la participación y vinculación del indiciado en etapas incluso preprocesales a efectos de preservar el derecho de defensa, como ocurrió en la sentencia C-025 de 2009, en la cual se pronunció sobre una demanda formulada contra los artículos 237, 242, 243, 244 y 245<sup>10</sup> del Código de Procedimiento Penal, por desconocer el derecho a la defensa técnica y, por esa vía, de los derechos a la igualdad y al debido proceso, al no permitir al indiciado y a su defensor participar en la audiencia de revisión de legalidad de las diligencias allí previstas, cuando éstas se practican durante la etapa de indagación preliminar, es decir, antes de que se formule la imputación y se dé inicio a la etapa de investigación formal. La Alta Corporación estableció, que “solamente se entiende garantizado el derecho de defensa en la medida en que éstas sean interpretadas en el sentido que se permita la participación del indagado y su apoderado durante el trámite de la audiencia de revisión de legalidad de las diligencias, independientemente al hecho de que ésta se realice antes o después de formulada la imputación, esto es, en la etapa de indagación o en la etapa de la investigación formal.”

Posteriormente, la Corte realiza un nuevo pronunciamiento en torno al mismo derecho de defensa, pero en relación con los derechos que adquiere al momento de ser imputado y la imposibilidad de acceder a unos derechos por no tener tal calidad, por virtud del inciso 1 del artículo 8 de la Ley 906 de

---

<sup>10</sup> Art. 237: Audiencia de control de legalidad posterior, art. 242: Actuación de agentes encubiertos, art. 243: Entrega vigilada, art. 244: Búsqueda selectiva en bases de datos y art. 245: Exámenes de ADN que involucren al indiciado o al imputado.



2004<sup>11</sup>, destacó en esa oportunidad la Corte la posibilidad de activar el derecho de defensa y varios de los derechos que lo componen, en cabeza de una persona, antes de que esta adquiriera la condición de imputado,<sup>12</sup> y en esa medida, la interpretación incluyente era la que resultaba ajustada a la Constitución.

Recientemente la Corte, ha determinado que como quiera que el artículo 286 del C.P.P., prevé la formulación de imputación como una *“acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado, en audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control de garantías.”* No le era dable al indiciado en virtud del derecho de defensa, solicitar la celebración de su propia audiencia de imputación, como quiera que los derechos del sujeto pasivo de la investigación surgen desde el momento mismo en que se tiene conocimiento, por cualquier medio, de que cursa una investigación en su contra.

---

<sup>11</sup> Cuyo texto es el siguiente: “Artículo 8o. DEFENSA. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal, en lo que aplica a: (...)”

<sup>12</sup> En esta oportunidad, la Sala expuso algunas de las hipótesis en las que se activa el derecho de defensa antes de que se adquiriera la condición de imputado: (i) cuando se aplica una medida cautelar como el allanamiento por parte de autoridad pública competente, bajo el entendido que se pretende obtener material probatorio y evidencia física; (ii) en el instante mismo de un accidente de tránsito y ante la evidencia de un posible homicidio culposo; y (iii) ante los posibles señalamientos públicos, efectuados por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional o cualquiera de los intervinientes en el proceso penal, en los cuales se endilga algún tipo de responsabilidad penal. Además, señaló que la activación de derecho de defensa en un capturado, por afectación del derecho a la libertad personal, trae consigo el siguiente conjunto de derechos y prerrogativas: el derecho a guardar silencio y que éste no se utilice en su contra; el derecho a conocer la razón por la cual se realiza la captura. Así mismo, a entender la razón a través de un intérprete si le es imposible hacerlo por los órganos de los sentidos o hacerlo oralmente; el derecho a cuestionar la propia privación de la libertad; el derecho a ser conducido ante un juez en el término de treinta y seis horas que estipula la Constitución; el derecho de no autoincriminación; el derecho a ser representado por un abogado de confianza; el derecho a comunicarse efectivamente con su abogado; el derecho a que se le nombre un abogado de oficio si la persona capturada no cuenta con recursos para costearse uno propio; y el derecho a disponer de un término razonable para preparar su defensa.

## INFERENCIA RAZONABLE

De otro lado, no obstante, considerarse que la audiencia de imputación se denomina como de mero trámite, lleva inmerso en su núcleo esencial el principio de legalidad, en primer lugar, por cuanto se trata de narrar los hechos jurídicamente relevantes y que revisten las características de delito, esto es, que se enmarca dentro de una norma del Código Penal; en segundo lugar, por cuanto la audiencia tiene un trámite previamente establecido en la ley procesal penal, el cual debe ser dado a conocer al ciudadano, así como también darse a conocer los derechos y garantías con las que contará en las etapas del proceso - investigación y juzgamiento -.

Como quiera que el derecho de defensa es una garantía del procesado y es el Estado quien debe brindar las herramientas y procedimientos para que este sea efectivo en cualquier investigación, "la jurisprudencia y la doctrina han coincidido en sostener que éste se proyecta con mayor intensidad y adquiere mayor relevancia en el escenario del proceso penal, en razón de los intereses jurídicos que allí se ven comprometidos, las materias de las que se ocupa y las graves consecuencias que tiene para el procesado la sentencia condenatoria".<sup>13</sup> . De allí que el proceso penal incide directamente en la comunidad como quiera que cada vez tenemos mayor acceso a los expedientes y los asuntos que en ellos se tratan son de dominio público, debido a la alta divulgación de los medios de comunicación quienes abanderan esta información e incluso debaten sobre decisiones de resorte judicial que causan polémica en la comunidad en general y que en algunos

---

<sup>13</sup> Corte Constitucional, sentencia C-025 de 2009, MP. Rodrigo Escobar Gil. SV. Jaime Araújo Rentería.

eventos llegan a permear el criterio del juez, sobre todo cuando se trata de medidas de aseguramiento privativas de la libertad.

De allí se desprende que debe existir un nexo entre los hechos jurídicamente relevantes y el delito que se le imputa, elementos con los cuales debe realizarse, no solo por parte del Fiscal sino del Juez una clara inferencia razonable del eventual compromiso del indiciado en los hechos que se investiga, lo que quiere denotar la norma es que se trata de un simple ejercicio lógico que no puede tornarse complicado para los intervinientes, pues se parte de la base que se dispone de medios de conocimiento persuasivos que lo ubican en el grado de posibilidad, luego, “según el *principio de progresividad*, se allegarán elementos materiales probatorios y evidencia a fin de acreditar la materialidad del delito y la responsabilidad del inculcado con miras a sustentar la formulación de acusación con un grado de *probabilidad de verdad*, momento culminante de la investigación que la reviste de un halo definitivo delimitando el marco factual y jurídico dentro del cual habrá de surtir el debate oral”<sup>14</sup>.

Es preciso resaltar que el supuesto fáctico que se encuadra en la norma sustancial del Código Penal, se compone de supuesto fáctico esencial<sup>15</sup> y accesorio, el primero “es inmutable porque hace parte de la estructura del proceso acusatorio y produce los efectos señalados por la doctrina como son: en primer lugar, el condicionamiento judicial y en segundo lugar, respecto de ese hecho esencial contenido en la sentencia se produce el efecto de cosa juzgada, tal como aparece previsto en el artículo 29 C.N. que

---

<sup>14</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 08 de julio de 2009, radicación 31280.

<sup>15</sup> HERNANDEZ ESQUIVEL, Alberto, Juicio Oral y Congruencia. Universidad Externado de Colombia, Volumen XXVI, número 78. 2006. Pag. 96.

erige como garantía del ciudadano “no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.<sup>16</sup>

Por lo anterior, la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 20 de octubre de 2005, radicación 24026 determinó que el juzgador al momento de elaborar el correspondiente juicio de derecho puede llegar a transgredir el principio de congruencia, en tratándose de la aceptación de cargos, por acción o por omisión, presentándose en los siguientes eventos:

*1. Por acción:*

*a) Cuando se condena por hechos o por delitos distintos a los contemplados en las audiencias de formulación de imputación o de acusación, según el caso.*

*b) Cuando se condena por un delito que nunca se hizo mención fáctica ni jurídicamente en el acto de formulación de imputación o de la acusación, según el caso.*

*c) Cuando se condena por el delito atribuido en la audiencia de formulación de imputación o en la acusación, según el caso, pero se deduce, además, circunstancia, genérica o específica, de mayor punibilidad.*

*2. Por omisión:*

---

<sup>16</sup> Ibídem.

*a) Cuando en el fallo se suprime una circunstancia, genérica o específica, de menor punibilidad que se hubiese reconocido en las audiencias de formulación de la imputación o de la acusación, según el caso.*

Dado estas consideraciones, la misma Corte Suprema de Justicia en sentencia del 20 de octubre de 2005, radicación 24026 determinó que el juzgador al momento de fallar debe salvaguardar el derecho de defensa y el principio de congruencia, en casos como el allanamiento a cargos, toda vez que en la audiencia de individualización de pena y sentencia del art. 447 del C.P.P., no puede tenerse en cuenta las circunstancias que gradúan el injusto y que no fueron aducidas en la audiencia de imputación, por cuanto esta inclusión hace variar la determinación del cuarto a partir del cual se ubica el juzgador y vulnera la oportunidad para que el procesado apele a sus circunstancias personales, familiares, sociales y de todo orden, así mismo, esa situación socava los intereses del declarado penalmente responsable pues se mengua la posibilidad de concesión de subrogados penales, la cuantificación de la pena pecuniaria, su forma de cumplimiento y la pena accesoria. De otro lado, no puede perderse de vista que cuando se presenta allanamiento a cargos o negociación por virtud de preacuerdo, la imputación que se realiza en la respectiva audiencia ante Juez de Control de Garantías debe ser acatada por el Juez de Conocimiento que profiere el fallo condenatorio, sin embargo dicho acatamiento está sometido a que se haya realizado un control previo para evitar el desconocimiento de garantías fundamentales y en esta oportunidad “el principio de congruencia opera e manera absoluta y rígida, es decir, el funcionario judicial inexorablemente debe condenar de acuerdo con los cargos contenidos en el acta respectiva, bien sea la que contiene el allanamiento unilateral por parte del procesado, o

la que señala los términos del acuerdo o de la negociación concertada entre éste y la Fiscalía en cuanto permita el proferimiento del fallo (art. 351, num. 4° de la Ley 906)”<sup>17</sup>. Se destaca entonces que el supuesto fáctico respecto del cual se formula una imputación jurídica en la audiencia correspondiente debe ser el mismo que constituye el presupuesto fáctico de la acusación, pues en el caso en que no haya correspondencia se estaría frente a una violación del debido proceso, dado que se presentaría una acusación, sin preexistencia de una imputación con la consecuencia que se impide activar el derecho de defensa en cabeza del destinatario de la ley penal. No sobra advertir que también puede ocurrir que se precluya la investigación o se aplique el principio de oportunidad caso en el cual no se aplicaría la mentada congruencia.

En este sentido, sin lugar a equívocos puede afirmarse que en la Ley 906 de 2004, los actos de la Fiscalía no son jurisdiccionales sino de investigación, con excepción de aquellos que impliquen restricción de los derechos fundamentales de las personas, los cuales deben ser en todo caso controlados por el juez de garantías, quien los autoriza y convalida en el marco de las garantías constitucionales, “guardándose el equilibrio entre la eficacia del procedimiento y los derechos del implicado mediante la ponderación de intereses, a fin de lograr la mínima afectación de derechos fundamentales”<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 20 de octubre de 2005, radicación 24026.

<sup>18</sup> Sentencia C-025 de 2009 (MP. Rodrigo Escobar Gil. SV. Jaime Araújo Rentería). Ver también, las Sentencias C-873 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SPV. Jaime Araújo Rentería; SV. y AV. Alfredo Beltrán Sierra; SV. Álvaro Tafur Galvis); C-591 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández. SPV. Alfredo Beltrán Sierra); y C-1194 de 2005 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).

De otro lado, cabría preguntarse sobre las medidas de aseguramiento y la inferencia razonable de autoría o participación del imputado, en cuanto a si puede abstenerse el juez de control de garantías de imponerla, si evidencia de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente existen dudas sobre la inferencia, como por ejemplo, en los eventos de caso fortuito y fuerza mayor (causal 1ª, art. 32 del Código Penal), insuperable coacción ajena (causal 8ª ibídem), errores de tipo (causal 10ª, primera parte), pues se trataría de una situación justificante de la conducta que a voces del artículo 32 del C.P. exonera de responsabilidad. Sobre este punto, es conveniente indicar que en vigencia de la ley 600 de 2000, inciso 3º del artículo 356, se consagró que “no procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el procesado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad”, por lo anterior es que se considera que no se podría imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad, en casos como los que se exponen, habida cuenta que se debe realizar por parte de Fiscal y Juez la evaluación del dolo, tanto en su aspecto objetivo como subjetivo.

## CONCLUSIONES

Con fundamento en lo anteriormente expuesto se puede señalar que:

- El Juez de Control de Garantías se erige en el Sistema Penal Acusatorio como el funcionario encargado de establecer límites y controles al ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía, con el fin de garantizar la vigencia de los principios constitucionales y las garantías del imputado, para lo cual acude a criterios de proporcionalidad, ponderación, razonabilidad y necesidad, en aras de ejercer un control de los actos que llegan a su conocimiento.
- El sistema procesal penal se encuentra permeado por el principio de congruencia el cual se convierte en una barrera contra la arbitrariedad y limita las facultades que se otorgan a los administradores de justicia cuando deben resolver un asunto penal.
- El principio de Congruencia irradia su efectividad al impedir que una persona pueda ser acusada por unos hechos y delitos, y termine condenada por hechos o delitos diferentes, así como también impide que respecto del hecho esencial contenido en la sentencia, se juzgue dos veces, dado el efecto de cosa juzgada que se produce conforme lo previsto en el artículo 29 C.N.
- La calidad de indiciado, imputado o acusado supone la actividad de la Fiscalía General de la Nación ante los jueces, lo que implica un control efectivo, no solo desde el punto de vista normativo, sino también factico y probatorio, así como formal y material.
- La acción penal, se caracteriza por el principio de progresividad, lo que implica el desarrollo progresivo y escalonado de la investigación, es decir, que se empieza con una posibilidad, continua con la



probabilidad y culmina con certeza, la audiencia de imputación es uno de los primeros escalones en este camino iter procesal, en cada uno de ellos se realizan controles por parte de los jueces sobre la imputación, acusación y sentencia, debiéndose rechazar de plano todas las acusaciones infundadas o sorpresivas que no avizoren la verosimilitud de la acusación.

- El desconocimiento del principio de congruencia puede motivar a las partes e intervinientes a promover el recurso extraordinario de casación previsto en la Ley 906 del 2004.
- A partir de la entrada en vigencia de la ley 906 de 2004, se puede determinar que la congruencia no solo se predica de la acusación y sentencia, sino también de la imputación, acusación y sentencia, triada en la cual se edifica el proceso penal en Colombia.

## BIBLIOGRAFÍA

- HERNANDEZ ESQUIVEL, Alberto, Juicio Oral y Congruencia. Universidad Externado de Colombia, Volumen XXVI, número 78. 2006. Pag. 96.
- Acta N° 25 del 30 de junio de 2003, Yesid Ramírez Bastidas, p. 24.
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 27 de julio de 1998, radicación 9857.
- Corte Constitucional, sentencia C-541 de 01 de Octubre de 1998. M.P. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
- Corte Constitucional, sentencia C-620 del 13 de junio de 2001. M.P. JAIME ARAUJO RENTERÍA.
- Corte Constitucional, sentencia C-1288 del 5 de diciembre de 2001. M.P. ÁLVARO TAFUR GALVIS.
- Sentencia de segunda instancia del 29 de septiembre de 2005, radicación 23914.
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 1° de junio de 2006, radicación 24764.
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 20 de octubre de 2005, radicación 24026.
- Corte Constitucional, sentencia C-025 de 2009, MP. RODRIGO ESCOBAR GIL. SV. JAIME ARAÚJO RENTERÍA.



- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 08 de julio de 2009, radicación 31280.